



Universidad
de Alcalá

**“LOS LÍMITES AL SECRETO PROFESIONAL DEL
ABOGADO: EL BLANQUEO DE CAPITAL Y LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”**

**Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado de
la Universidad de Alcalá**

Presentado por:

D^a. Laura Álvarez Cristóbal

Dirigido por:

D. Eduardo Ranz Alonso

Alcalá de Henares, a 31 de mayo de 2021



ÍNDICE

- 1. INDICE DE ABREVIATURAS**
- 2. RESUMEN Y PLAN DE TRABAJO**
- 3. INTRODUCCION**
- 4. EL SECRETO PROFESIONAL**
 - 4.1 REGULACION**
 - 4.2 FUNDAMENTO DEL SECRETO PROFESIONAL**
 - 4.3 EXCEPCIONES Y DISPENSA**
 - 4.4 EL ABOGADO COMO TESTIGO EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL**
 - 4.5 CONSENTIMIENTO DEL CLIENTES**
 - 4.6 COMUNICACIONES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y ENTRE ABOGADOS, ¿SECRETAS?**
- 5. EL BLANQUEO DE CAPITALS**
 - 5.1 ANTECEDENTES HISTORICOS**
 - 5.2 CONCEPTO Y REGULACION**
 - 5.3 TIPIFICACION**
 - 5.4 LEY 10/2010 DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO**
- 6. EL ABOGADO FRENTE AL BLANQUEO DE CAPITALS Y SECRETO PROFESIONAL**
 - 6.1 LA FIGURA DEL ABOGADO**
 - 6.2 COLABORACION DEL ABOGADO EN LA PREVENCION DEL BLAQUEO**
 - 6.3 LAS INTERVENCIONES DEL ABOGADO SUJETAS A RESPONSABILIDAD**

6.4 EXCEPCIONES AL DEBER DE SECRETO EN EL AMBITO DEL BLANQUEO DE CAPITAL

7. JURISPRUDENCIA Y CASOS RELEVANTES

7.1 MICHAUD VS FRANCIA

7.2 SENTENCIA AKZO

7.3 SENTENCIA 200/2011, DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA, DE 31 DE MARZO

8. DERECHO COMPARADO

9. CONCLUSIONES

10. BIBLIOGRAFIA

1. INDICE DE ABREVIATURAS

- **SEPBLAC:** Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales
- **GAFI:** Grupo de Acción Financiera
- **TEDH:** Tribunal Europeo de Derechos Humanos
- **CEDH:** Convenio Europeo de Derechos Humanos
- **TJUE:** Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- **CE:** Constitución Española
- **LOPJ:** Ley Orgánica del Poder Judicial
- **CP:** Código Penal
- **LECRIM:** Ley de Enjuiciamiento Criminal
- **EGAE:** Estatuto General de la Abogacía Española
- **CD:** Código Deontológico
- **CGAE:** Consejo General de la Abogacía Española
- **BC:** Blanqueo de Capitales
- **TS:** Tribunal Supremo
- **TC:** Tribunal Constitucional
- **LO:** Ley Orgánica
- **ART:** Artículo

2. RESUMEN Y PLAN DE TRABAJO

En la realización de este trabajo se procederá a analizar los límites que tiene el secreto profesional del abogado en relación con un posible delito de blanqueo de capitales.

Desde la entrada en vigor de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los profesionales de la abogacía están sujetos a los deberes de prevención y colaboración que esta norma les impone.

A lo largo del trabajo se estudiará la dificultad para conseguir un equilibrio entre el deber de secreto del abogado y el derecho de defensa del cliente y las obligaciones de colaboración que nos impone esta normativa desde su entrada en vigor. Se analizarán las obligaciones de los abogados, así como la regulación tanto del secreto profesional como la del delito de blanqueo de capitales.

Por último, se procederá al estudio de la jurisprudencia tanto nacional como internacional pudiendo analizar las diferentes soluciones que se aplican en cada caso, además del estudio de los ordenamientos jurídicos de otros países en materia de blanqueo de capitales.

En definitiva, mediante este trabajo se pretende exponer los elementos de prevención tanto del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo que regula la Ley 10/2010 y analizar su incidencia en el secreto profesional del abogado.

Palabras clave: Blanqueo de capitales, secreto profesional, terrorismo, confidencialidad, ejercicio, abogado, derecho, deber, prevención, intimidad, obligación.

ABSTRACT

In carrying out this work, we will proceed to analyse the limits of lawyer's professional secret in relation to a possible crime of money laundering.

Since the entry into force of Law 10/2010 on the prevention of money laundering of capital and financing of terrorism, legal professionals are subject to duties of prevention and collaboration that this regulation imposes on them.

Throughout the work we will study the difficulty of achieving a balance between the lawyer's duty of secret and the client's right of defence and the collaboration obligations imposed on us by this regulation since its entry into force. The obligations of lawyers will be analysed, as well as the regulation of both professional secrecy and the crime of money laundering.

Finally, we will proceed to the study of both national and international jurisprudence, being able to analyse the different solutions that are applied each case, in addition to the study of the legal systems of other countries in matters of money laundering.

In short, this work it is intended to expose the preventive aspects both money laundering and financing of terrorism that regulates Law 10/2010 and analyse their impact on the professional secret of the lawyer

Keywords: Money laundering, professional secrecy, terrorism, confidentiality, exercise, lawyer, right, duty, prevention, privacy, obligation.

3. INTRODUCCIÓN

Ante el riesgo de afloramiento de organizaciones criminales cada vez mayor, a finales del año 1980 surge la política de prevención de blanqueo capitales. Los instrumentos existentes hasta entonces no proporcionaban una adecuada respuesta, lo que dio lugar a una nueva política internacional coordinada.

El blanqueo procedente de actividades como el narcotráfico o la corrupción son las formas más graves, pero también se considera blanqueo de capitales el de bienes procedentes de la defraudación fiscal, aunque en este caso no proceda de una actividad delictiva previa.

La preocupación por el narcotráfico y la idea de combatir el blanqueo de capitales originó la creación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en 1989. Su objetivo es la creación de medidas legislativas reglamentarias y operacionales eficaces de lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otras amenazas del sistema financiero internacional. Estas recomendaciones del GAFI, que fueron aprobadas en 1990 constituyeron la inspiración de la primera directiva comunitaria, la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991. En España, en el año 1993 se creó el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), que es la unidad de inteligencia financiera que ejecuta todas las sanciones y contramedidas financieras de la Ley de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo, cuyo director es Pedro Manuel Comín Rodríguez, desde octubre de 2020.

Fue la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo y la financiación del terrorismo la que se ha traspuesto en la legislación española mediante la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. La Directiva 2005/60/CE, o Tercera Directiva incorpora al derecho comunitario las Recomendaciones del GAFI. Su marco normativo ha de ser transpuesto y completado dando lugar a una normativa nacional bien detallada.

Es a partir de la entrada en vigor de dicha Ley 10/2010 cuando en España se ha establecido una serie de obligaciones a los sujetos obligados. Entre ellas, las que aquí interesan son las impuestas al abogado consistentes en la colaboración con autoridades como el SEPBLAC o el GAFI en esta materia, debiendo comunicar cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En lo que nos afecta a los profesionales de la abogacía, es muy difícil mantener el equilibrio entre ejercer nuestra obligación de defensa y realizar una colaboración efectiva en la prevención del blanqueo de capitales como nos exige esta legislación actual.

Por lo tanto, la presente investigación pretende llevar a cabo un análisis jurídico del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, desde una perspectiva general, junto con el análisis de la Ley 10/2010, la jurisprudencia surgida al respecto y las limitaciones que ha supuesto para el secreto profesional del abogado.

Siendo el equilibrio entre nuestra obligación de defensa y de secreto profesional y una colaboración efectiva con las autoridades en lo que se centrará este trabajo, se analizará como estas nuevas obligaciones que nos impone la Ley 10/2010 hacen de dicho equilibrio una ardua tarea.

4. EL SECRETO PROFESIONAL

4.1 CONCEPTO Y REGULACIÓN

Sánchez Stewart, Doctor en Derecho, experto en materias como la Prevención de Blanqueo de Capitales, define la obligación de secreto profesional como la obligación de no revelar, declarar o comunicar, cualquier hecho del que haya tenido conocimiento el abogado en razón de su ejercicio profesional.¹

Consiste en la piedra angular de la Abogacía, y así lo define nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 3 de marzo de 2003, en la que la parte recurrente pretendía la nulidad del Real Decreto 658/2001 por el que se aprobada el EGDAE por entender que era contrario a derecho. Entre otros motivos, los demandantes postulaban la nulidad de los artículos 25, 84.b), 85.e) y 87.1.a) del Estatuto, por considerar que infringían las normas reguladoras de publicidad y libre competencia en cuanto consideraban contraria a las normas deontológicas la

¹ Sánchez Stewart, Nielson. *“Manual de deontología para abogados”*. 1ª Edición. Ed. La Ley, Madrid, 2012.

publicidad que hacía referencia directa o indirecta a clientes del propio abogado. Al respecto, el Tribunal Supremo señala en su fundamento jurídico sexto:

“...El Abogado del Estado articula su oposición a la nulidad de los preceptos que prohíben hacer publicidad con referencia directa o indirecta a clientes del propio Abogado en que si esto se admitiese serían factores metajurídicos y metaprofesionales -identificar quien consume el producto-, que no cualifican necesariamente los servicios desde un punto de vista profesional, los que pasarían a ser lo relevante [...].

Entendemos por eso que mayor trascendencia para justificar esta restricción es el deber de discreción y secreto profesional que, en términos en que se expresa la representación procesal del Consejo General, "constituye piedra angular del ejercicio de la Abogacía".²

El Tribunal Supremo entiende que no son las normas sobre publicidad las que deben regular este aspecto, sino que ya lo hace el deber de secreto profesional por ser fundamento del ejercicio de esta profesión.

El secreto profesional va más allá de mantener secretas las cosas que están ocultas. El abogado debe de tener en cuenta que un hecho de cualquier naturaleza que haya conocido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional está protegido por el secreto profesional.

La propia Constitución Española (CE) protege el derecho al secreto profesional, en sus artículos 18 y 24, y determina que será la ley la que lo regulará.

Así, el **artículo 24 de la CE** menciona expresamente el secreto profesional en su apartado 2 que dispone:

*...La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.*³

De esta manera, todo aquello que conozca el abogado al dirigir y defender a las partes en un proceso, o al llevar a cabo una actividad de asesoramiento o

²Sentencia del Tribunal Supremo 496/2001, de 3 de marzo de 2003.

³ Constitución Española.

consejo jurídico está sometido a la obligación de secreto, que le viene impuesta por el Estatuto general de la Abogacía española (EGAE) y por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). De otra forma, estaríamos ante la comisión de una revelación de secretos previsto en el **artículo 199.2 del Código Penal**, que establece que:

*El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de 2 a 6 años.*⁴

En nuestro Estatuto General de la Abogacía española, se hace mención al deber de guardar secreto en su **art.32** que reproduce el **542.3 LOPJ**, el cual señala lo siguiente:

*3. Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.*⁵

Por otro lado, el Código Deontológico (CD) enumera el secreto profesional como uno de los principios fundamentales de la Abogacía. Su **artículo 5** dispone en su párrafo primero (el subrayado es propio):

*1. La confianza y confidencialidad en las relaciones con el cliente, ínsita en el derecho de éste a su defensa e intimidad y a no declarar en su contra, impone a quien ejerce la Abogacía la obligación de guardar secreto, y, a la vez, le confiere este derecho, respecto de los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, limitándose el uso de la información recibida del cliente a las necesidades de su defensa y asesoramiento o consejo jurídico, sin que pueda ser obligado a declarar sobre ellos como reconoce la Ley Orgánica del Poder Judicial.*⁶

⁴ Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

⁵ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

⁶ Código Deontológico de la Abogacía Española.

Así, nuestro Código Deontológico lo concibe como un derecho y un deber para el Abogado, que se extiende a los empleados dependientes y colaboradores de aquel, y que no está sujeto a ningún límite de tiempo.

A nivel internacional, se encuentra recogido en la Declaración de Perugia sobre principios deontológicos de la Abogacía de la Comunidad Europea, de 16 de septiembre de 1977. También en el Código de Deontología de los Abogados de la Comunidad Europea, de 28 de octubre de 1988, asumido por el Consejo general de la Abogacía española, el 22 de septiembre de 1989.⁷

En conclusión, el secreto profesional se regula en numerosas leyes y no se trata de un simple aspecto ético o deontológico de nuestra profesión, sino que constituye un importantísimo instrumento para preservar la intimidad de nuestros clientes, pero sobre todo su derecho de defensa.

4.2 FUNDAMENTO DEL SECRETO PROFESIONAL

El cliente precisa del abogado para conocer el alcance y la transcendencia de sus actos, y para ello, debe confesarle sus circunstancias más íntimas. El abogado se convierte así en custodio de la intimidad personal de su cliente y de su inalienable derecho a no declarar contra sí mismo. Sin la garantía de la confidencial no puede haber confianza.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1998 se encargó de declarar que el secreto profesional era el **fundamento del derecho de defensa**. En esta sentencia se desestima el recurso de apelación de un abogado al que finalmente condenan a 6 meses de suspensión en el ejercicio profesional por quebrantar el deber de secreto. Supondrá un grave peligro para este último derecho si el deber de secreto se restringiera a las informaciones obtenidas por el abogado en actuaciones formales, y no comprendiera aquellas que se llevan a cabo por razones de confianza al margen del proceso o actuación profesional. Y dice, textualmente:

⁷Otero Gonzalez, M^a del Pilar. *"Justicia y secreto profesional"*. Ed. Centro de estudios Ramon Areces, S.A, Madrid, 2003.

“...conviene dejar sentado que, aun cuando las gestiones se hubieran encargado o realizado fundándose prevalentemente en razones de confianza (y no de otro tipo, como la solvencia técnica o la especialización del abogado), y aun cuando las mismas no hubieran sido objeto de consideración específica a efectos retributivos, su indudable relación con la actividad conjunta del abogado en defensa de su cliente no permitiría considerarlas ajenas al ámbito objetivo sobre el que se proyecta el secreto profesional, pues ni la preponderancia de los vínculos de confianza, [...] ni la ausencia de retribución por un acto específico son suficientes para desvirtuar la naturaleza profesional de la función de defensa jurídica en que la abogacía consiste”.⁸

Además, en nuestro secreto profesional, como se ha apuntado anteriormente, concurre otro derecho fundamental: **la libertad de defensa del justiciable**.

En palabras de Juan José López Ortega, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y especialista en el orden jurisdiccional penal, “deber y derecho al secreto son las dos caras de una misma moneda”. No obstante, del deber no se deduce una dispensa, como la del deber de declarar o denunciar en el proceso penal. Esto quiere decir que la exención no nace del deber de secreto, sino de la ponderación entre bienes jurídicos concurrentes.

La obligación de guardar secreto es, además, una cuestión de orden público. Por ello, la obligación de no revelar los secretos de los que se conozcan en el ejercicio de la profesión no solo tenga carácter ético, sino que tiene su origen de las normas impuestas por el Estado para proteger el orden social.

Se puede decir que, la vulneración del derecho a la intimidad mediante el incumplimiento de la obligación de secreto profesional, por la importancia del bien jurídico que protege, es digno de protección penal.

Por otro lado, la defensa de un inocente como la de un culpable, conforma la función fundamental de un abogado. Por lo que la obligación que nos imponen a los abogados de informar a las autoridades en caso de sospechar que sus clientes están blanqueando dinero procedente de actividad delictiva, **implica acabar con**

⁸ Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de febrero de 1998.

el derecho de defensa, pues la confidencialidad es un derecho de los ciudadanos, y si los abogados faltan a este deber conlleva una condena penal.

Esto es el fundamento de la defensa de oficio. Si el abogado de oficio descubre, durante su relación con un cliente por cualquier medio, que el justiciable ha falseado u ocultado datos o ha efectuado una declaración errónea, no puede sin vulnerar la obligación de guardar el secreto profesional revelar los hechos por él conocidos o averiguados ni siquiera si fuese requerido para ello por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

En definitiva, en el secreto profesional del abogado deben comprenderse en dos conceptos: secreto profesional y expresión del derecho de defensa. Ambos aspectos fundamentales en nuestra profesión, que colisionan junto con el deber de lealtad hacia el cliente, con la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales cuando ésta obliga a los abogados a, entre otros, poner en conocimiento del SEPBLAC, cualquier actividad de su cliente que estime sospechosa en esta materia sin precisar de un previo consentimiento del cliente. Por lo tanto, no todo abogado goza del derecho de confidencialidad en el ejercicio de su profesión.

4.3 EXCEPCIONES Y DISPENSA

El secreto profesional tiene una gran relevancia en el ejercicio de una profesión como la abogacía, fundamentado en la confianza y lealtad en la relación abogado-cliente. Por tanto, para el correcto funcionamiento del secreto profesional existen dos excepciones que permiten seguir cumpliendo con dicha obligación: la excepción a denunciar (art.263 LECrim) y a declarar (416.2º LECrim).

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), establece en el apartado 2 de su **artículo 416** la dispensa de obligación de declarar al letrado del procesado en relación a los hechos que este le hubiese comunicado en su calidad de defensor, disponiendo:

2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor.⁹

Cuando concurren, por un lado, el secreto profesional para la protección de la intimidad confidencial del cliente, y por otro, el deber de colaboración con la justicia, prevalece el secreto profesional. En este caso un deber queda eliminado por el otro por imposición legal. El sometido al artículo 416 de la Lecrim solo tiene el de guardar secreto, ya que el deber de colaborar con la justicia desaparece por la existencia de una norma de colisión que decide qué deber tiene que retroceder.

El artículo 416.2 recoge una exención fundamentada en el derecho de defensa, y no tanto en la intimidad del cliente. Hay que tener en cuenta que la obligación de secreto comienza en el momento en que se asesora y no requiere que exista formalmente una acusación. Además, no está referido solo a la persona del acusado, sino que incluye los que han sido conocidos mediante su actividad profesional conexas al asunto encomendado, propia del ejercicio de la abogacía. De hecho, el art.199.2 del CP alude a secretos de otras personas, no necesariamente del propio cliente.

El secreto ya desde el primer momento de contacto entre cliente y abogado es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, el artículo 416.2 habla de “procesado”, por lo que, si se realizara una interpretación literal del mismo, esta exención no protegería el secreto del cliente no procesado, o de aquel que no figure aun como defensor. Pero, la jurisprudencia ya se ha encargado de que esa interpretación literal debía de ser abandonada para realizar una conjunta de este artículo y los artículos 199.2 CP, 542.3 LOPJ, 5 del CDAE, y 32 del EGAE, y por ende en la aplicación del 416.2 CP, será indiferente que el abogado actúe como defensor o no. Al respecto, la Sentencia del TS 451/2018, de 10 de octubre, se pronunció señalando lo siguiente:

“...lo relevante del contenido del secreto no es que afecte a las relaciones con el abogado solamente de los acusados, que es lo que da lugar a la excusa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino a las conversaciones del

⁹ Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

profesional con su cliente, sea o no acusado. Ciertamente si el cliente no es parte del proceso no se habrá vulnerado su derecho de defensa en este proceso. Pero será igualmente ilícita la obtención de la información, transmutada en medio probatorio en este proceso”¹⁰.

Entonces, como derecho ¿es renunciable? y como obligación ¿es condonable?

Si el secreto solo debe guardarse en razón de la relación de confianza que debe existir entre cliente y abogado, podría pensarse que el cliente es el titular del derecho y como tal, puede disponer de él a su antojo. Pues bien, nuestro más Alto Tribunal ha declarado que el cliente no es titular del derecho de secreto profesional. En su sentencia 183/1994 de 20 de junio, nuestro más alto Tribunal señala que: “el secreto profesional solo es invocable por el abogado defensor que sería, en su caso, el titular del derecho, y no por el demandante sobre el cual solamente produce efectos meramente reflejos y carece de legitimación para pedir amparo de un derecho fundamental que les ajeno.”

El artículo 416.2 reza dispensado, no obligado, pero esto no puede llevar a entender que, el abogado considerando que la revelación puede favorecer a su cliente, aun en contra de su voluntad, podrá declarar al primar el interés de impartir recta e imparcial justicia sobre el derecho a su intimidad.

En cuanto a la obligación del denunciar, si un abogado se entera de la comisión de un delito, su obligación será denunciarla ante las autoridades. Sin embargo, si esa noticia le llega a través de su ejercicio profesional debe ceder el deber de cooperación con la justicia frente al deber de preservar la confidencialidad.

Cuando el abogado conoce que su cliente es el responsable de un delito por el que un tercero está cumpliendo condena, de nuevo esa colisión de deberes se decanta, cuando el abogado conoce de esos hechos a través del ejercicio de su profesión, por la preservación del secreto.

El secreto profesional protege, además la correcta Administración de Justicia, que justifica estas excepciones de declarar y denunciar. Se puede decir que ninguna autoridad podrá liberar al abogado de su obligación de preservar el

¹⁰ Sentencia del Tribunal Supremo 451/2018, de 10 de octubre de 2018.

secreto profesional cuando conozca de unos hechos como consecuencia de su ejercicio profesional, ni siquiera el mismo cliente.

Para concluir, no se debe olvidar que la institución del secreto profesional protege los bienes jurídicos de la intimidad y la defensa, y estos pueden entrar en conflicto con otros bienes jurídicos protegidos, por lo que se deberá ponderar en cada caso concreto, para determinar cuál cede.

4.4 EL ABOGADO COMO TESTIGO EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL

En relación con la exención de declarar que se acaba de exponer, otro interrogante versa sobre la figura del abogado como testigo. El abogado está obligado a comparecer a la presencial judicial ya que como cualquier ciudadano está obligado a atender a las citaciones y requerimientos del poder judicial incurriendo si no lo hace en la correspondiente responsabilidad. Pero antes de prestar declaración debe poner en conocimiento al juzgado que los hechos sobre los que se le va a preguntar están cubiertos por el secreto profesional ya que ha tenido conocimiento de los mismos en calidad de abogado de una de las partes.

En el caso de que algún juez le obligase a prestar declaración deberá negarse pidiendo amparo a la junta de gobierno de su colegio en virtud del art.41 del EGAE, que señala:

Si el abogado actuante considerase que la Autoridad, Tribunal o Juzgado coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida a su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio Juzgado o Tribunal bajo la fe del Secretario y dar cuenta a la Junta de Gobierno. Dicha Junta, si estimare fundada la queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad, independencia y prestigio profesionales.¹¹

Es reprochable citar a un compañero de profesión a prestar declaración sobre hechos cubiertos por la obligación de guardar secreto. El compañero no

¹¹ España. Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.

prestará declaración si está bien informado, pero si lo hace por inadvertencia o desconocimiento, su declaración no deberá ser tomada en cuenta en la medida que perjudique o beneficie a cualquiera de las partes (teoría del fruto del árbol envenenado). Y lo mismo se dice cuando el letrado sea designado por el turno de oficio.

En resumen, no es lícita la prueba que suministra el Letrado que debe guardar secreto profesional, y el Tribunal Supremo en su sentencia 797/2015 de 24 de noviembre se pronuncia al respecto expresando que “...es claro que una prueba propuesta que exige a un Abogado declarar sobre un hecho o noticia a través de su intervención profesional en el proceso es claramente inadmisible por contravenir el secreto profesional”. También en su sentencia 433/2008, de 3 de julio, califica de ilícita la prueba consistente en la declaración del letrado por violación de la garantía constitucional de su cliente, su derecho de defensa, y señala en su fundamento jurídico segundo:

“Y tampoco cabe entender por recuperado en el juicio el contenido de la declaración sumarial del acusado a través de la declaración, como testigo en dicho acto del juicio oral, del Abogado que le había asistido en dicha declaración anterior.

[...] el régimen de actuación de tal testigo ha de entenderse seriamente modificado por la Constitución. Esta garantiza, en su art. 24.2, el derecho de defensa. Y éste implica la certeza en el asistido por el Letrado de que lo que le comunique en el contexto de la confidencialidad profesional nunca podrá ser utilizado en su contra. De otra suerte la confianza en el Letrado sería inexistente. Y sin confianza no hay defensa posible.

[...] los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.

La nulidad de este medio de prueba acarrea la consecuencia de que el contenido de la declaración del acusado en la fase previa no ha sido lícitamente traído al juicio oral.

En consecuencia, no podía ser usado, como lo fue, para enervar la presunción de inocencia y justificar la declaración como probado del dato de hecho

consistente en atribuir la colocación en el vehículo y subsiguiente disposición por el acusado de la droga allí ocupada.”¹².

4.5 EL CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE:

Otro de los aspectos controvertidos en relación con nuestro secreto profesional es el consentimiento del cliente. Francisco Muñoz Conde, Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, y Catedrático de Derecho Penal desde 1974, considera que el abogado no puede revelar nada de lo que haya conocido directamente de su cliente, sin su autorización, aunque pudiera beneficiarlo objetivamente, impidiéndole así, revelar, por ejemplo, una impotencia que le impide cometer el delito de agresión sexual cualificada de que se le acusa.

Para saber si el consentimiento del cliente excluye el injusto penal, hay que tener en cuenta que hay dos injustos, el regulado en el 199.2 del CP de revelación de secretos y el del artículo 466 del mismo texto legal. El tipo regulado en el art. 466 del CP figura entre los delitos contra la Administración de Justicia integrantes del Título XX del Libro II. El bien jurídico protegido aquí no es, como en el caso del art. 199.2, la intimidad del cliente, sino la Administración de Justicia.¹³

Por tanto, el consentimiento del cliente resulta intrascendente a los efectos de aplicación del artículo 466 del Código Penal. El consentimiento únicamente puede excluir el injusto del artículo 199.2 del CP, la revelación de secretos.

Pero, ¿qué ocurre cuando nuestro cliente confiesa a su abogado que va a cometer un delito en un tiempo futuro?

Si el cliente informa a su abogado de propósitos de delinquir en el futuro, la obligación de secreto profesional cede y nada impediría que declarara como testigo sobre eso hechos, aunque siga siendo su abogado. En este caso, el secreto profesional cede, pues de lo contrario, podría dar lugar a la conducta recogida en el art.450 del CP (omisión del deber de impedir determinados delitos o de

¹² Sentencia del Tribunal Supremo núm.433/2008, de 3 de julio.

¹³ Córdoba Roda, Juan. *“Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales”*. Ed. Marcial Pons Ediciones jurídicas y sociales S.A, Madrid, 2006.

ponerlos en conocimiento de la autoridad). Pero en los supuestos de cometer otros delitos diferentes a los tipificados en el art. 450, el secreto profesional prevalece, y no integrará la figura típica de dicho artículo.

Soldado Gutiérrez resuelve que no hay deber de secreto porque no hay derecho de defensa, al ser un hecho futuro. Quedaría solo el derecho a la intimidad, porque no se trata de un hecho inscribible en el derecho a la intimidad, pues es un plan delictivo, y porque la función social del abogado exige no ocultar tal confidencia.

Por último, el abogado no puede revelar nada de lo que haya conocido por comunicación de su cliente, sin autorización, aunque pudiera beneficiarlo. Condenar a un inocente igual que absolver a un culpable, depende de la actividad probatoria: nadie es culpable o inocente si no se prueba. Se está contribuyendo a la realización de la Justicia Penal, aunque defender a quien se presume culpable no sea justo en sentido estrictos.

4.6 COMUNICACIONES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y COMUNICACIONES ENTRE ABOGADOS Y CLIENTES. ¿SECRETAS?

Como ya se ha señalado a lo largo de este trabajo, entre abogado y cliente hay una relación estrecha basada en la confianza la cual es esencial en esta relación. Por ello, las comunicaciones entre ellos están protegidas mediante el secreto profesional. Sin embargo, dicho secreto no es absoluto y en determinadas situaciones se limita o exceptúa.

Este derecho a la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado-cliente puede definirse como el derecho que tiene el cliente a impedir que se revele a terceros el contenido de las comunicaciones profesionales mantenidas con su abogado. Y también se puede definir como el principio jurídico en virtud del cual no cabe exigir la revelación, en el seno de un procedimiento, de determinadas comunicaciones abogado-cliente.

Por lo tanto, en base al secreto profesional, todas las comunicaciones recibidas y emitidas están sujetas a dicho secreto.

El apartado 3 del artículo 5 del Código Deontológico reza así:

3. Cualquier tipo de comunicación entre profesionales de la Abogacía, recibida o remitida, está amparada por el secreto profesional, no pudiendo ser facilitada al cliente ni aportada a los Tribunales ni utilizada en cualquier otro ámbito, salvo autorización expresa del remitente y del destinatario, o, en su defecto, de la Junta de Gobierno, que podrá autorizarlo discrecionalmente, por causa grave y previa resolución motivada con audiencia de los interesados. [...]. Se exceptúan de esta prohibición las comunicaciones en las que el remitente deje expresa constancia de que no están sujetas al secreto profesional.

Así, queda prohibida la aportación a los Tribunales o al cliente las comunicaciones entre abogados, con el único límite de la autorización de la Junta de Gobierno, la cual en casos de suma gravedad podrá aconsejar al abogado ponderando los bienes jurídicos en conflicto. Podemos observar aquí que la reciente reforma del Código Deontológico ha suprimido el antiguo apartado 8 en el que se excusaba de la preservación del secreto si este pudiera causar “perjuicios irreparables o flagrantes injusticias”.

Sin embargo, el abogado que trabaja para una empresa no goza de tal confidencialidad respecto a las comunicaciones con su empresa, mientras que las comunicaciones, telefónicas, por ejemplo, entre el Abogado y su cliente si las ampara el secreto profesional, y ampara cualquiera que sea la forma en que pueda un tercero inmiscuirse en las comunicaciones entre cliente y Abogado. De hecho, el Tribunal Supremo condenó en su sentencia 79/2010, de 9 de febrero de 2010, a un Magistrado por intervenir conversaciones mantenidas entre clientes y sus Abogados.

En conclusión, el deber de secreto del un abogado no es un bien disponible. Es un derecho y un deber absoluto y no pueden ser quebrantados. A pesar de la generalidad de la obligación de la guardar secreto, solo se exige a los abogados que actúan en tal carácter, no como particulares. Las normas deontológicas obligan al abogado cuando actúa como tal y no simplemente cuando en el sujeto concurre tal condición.

Además, en cuanto al ejercicio de oficio, existe un acuerdo adoptado por el Consejo General de la Abogacía española (CGAE) por el que el letrado de oficio no puede revelar datos, entregar documentos o suministrar cualquier información que haya obtenido en el ejercicio de su profesión, sea a través del propio solicitante o por otros conductos y no estará legitimado para promover la revocación del derecho a la justicia gratuita que haya sido reconocido.

Podemos concluir, citando a Sánchez Stewart de nuevo que, **“al acuñarse el secreto profesional del abogado, no se hizo para cobertura de nuestra conducta, sino para garantía de que la verdad solo puede obtenerse por caminos rectos, respetando la presunción de inocencia.”**¹⁴

5. EL BLANQUEO DE CAPITAL

5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El blanqueo de capitales o “lavado de dinero o de activo” tuvo su origen en Estados Unidos, en 1920, cuando Al Capone y otros mafiosos norteamericanos abrieron una red de lavanderías para esconder el dinero procedente de sus actividades ilícitas.

Al Capone fue declarado culpable y condenado en 1931, por delitos como evasión fiscal o venta ilícita de alcohol, a 11 años de cárcel y una multa de 50.000 dólares.

Fue en 1982 cuando en EEUU se realizaron confiscaciones de dinero blanqueado que procedía del tráfico de cocaína en Colombia. Este dinero era el que posteriormente se destinaba al negocio de lavanderías, facilitando la canalización del dinero. Fue así como el término “blanqueo de capital” comenzó a usarse en el ámbito judicial.

¹⁴ Sánchez Stewart, Nielson. *“Manual de deontología para abogados”*. 1ª Edición. Ed. La Ley, Madrid, 2012.

No obstante, el narcotráfico no es el único delito que origina el dinero a blanquear. El tráfico de armas, la corrupción, el tráfico de animales exóticos, de seres humanos o de órganos también originan el blanqueo de capitales. Pero fue el narcotráfico el que dio lugar a la Convención única de 1961 sobre estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972 así como el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971.

El blanqueo de capitales es uno de los delitos con mayor transcendencia económica, social y política en numerosos países. El conocimiento por los poderes públicos de las técnicas de blanqueo de capitales, así como de la evolución de las mismas ha motivado en los últimos años la creación de una nueva política internacional para crear nuevos instrumentos eficaces contra el blanqueo y mejorar lo ya existentes.

Como ya se adelantaba, el blanqueo de capitales en un principio estaba ligado al tráfico de estupefacientes, pero en la actualidad se vincula con otras actividades entre las que podemos destacar la corrupción política. En España, dicha corrupción se ha convertido en un fenómeno muy presente, y a colación se puede traer un artículo del catedrático en Derecho Penal José Manuel Gómez Benítez, que además fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, sobre la llamada amnistía fiscal. Gómez Benítez habla de esta amnistía como “una oferta de impunidad por la defraudación cometida y una forma más de blanquear dinero. Esta amnistía fiscal solo exige que los que se acojan a ella identifiquen los bienes que afloran y, a ser posible, traigan esos capitales a España desde los paraísos fiscales en los que se encuentran. Así, el Gobierno aprobó que la Agencia Tributaria no indague sobre el origen de los bienes, es decir, será una lavadora modélica del dinero sucio”.¹⁵ También señala que para aquellos criminales del narcotráfico o de la trata de personas no les interesa dicha amnistía, pues solo les garantiza la impunidad respecto de la defraudación, y dejarían rastro de su origen y acabar condenados por esos otros delitos. Por último, dice que “quienes han ofrecido la amnistía fiscal saben que sumergirse en el mundo del delito mancha, pero también que para que sea útil y no manche demasiado es imprescindible, una vez dentro, mirar hacia

¹⁵ Gómez Benítez, José Manuel. “Blanqueo de capitales contra la crisis”. Periódico ‘El País’. 2012.

otro lado. Esto es lo que significa la promesa de confidencialidad que acompaña a la mal llamada amnistía fiscal.”

Generalmente el blanqueo de capitales se lleva a cabo a través de grupos organizados que utilizan testaferros o sociedades instrumentales ocultando así el rastro del dinero. Además, una de sus principales características es su naturaleza internacional, por lo que necesita una respuesta internacional.

A lo largo de los siguientes epígrafes se estudiará y analizará la evolución del delito de blanqueo de capitales, así como la normativa internacional como su desarrollo en el ordenamiento jurídico español. El blanqueo de capitales puede entenderse como un aspecto fundamental en la delincuencia organizada; aquellos que cometen delitos como el tráfico de drogas, de armas o trata de personas, entre otros, necesitan métodos para ocultar sus beneficios y les permitan disfrutar de ese dinero ocultando su origen delictivo. El blanqueo de capitales está constantemente evolucionando y, por tanto, los medios para prevenirlo también han de hacerlo.

5.2 CONCEPTO Y REGULACIÓN

La conducta del blanqueo de capitales se cristalizó en España con la Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo. Actualmente, el blanqueo de capitales se tipifica en el artículo 301 del Código penal, aunque ha sufrido numerosas modificaciones. El termino blanqueo de capitales se puede definir de diversas maneras, entre las que se puede destacar la siguiente: el conjunto de mecanismos o procedimiento orientados a aparentar de legalidad a bienes de origen delictivo. Según el GAFI, se trata de “la conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilícita o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su acción”. Por otro lado, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) define el blanqueo como el “procedimiento que se construye y a través de los cuales se pretende dar apariencia legítima a fondos de origen criminal, e intenta agrupar los distintos modos de blanqueo”.

A partir de la reforma del Código Penal de 2005, se incluyó la referencia del delito de blanqueo de capitales, diferenciándolo de la receptación, entendiendo las ganancias que procedían del blanqueo como un aumento del patrimonio, conociendo que los bienes tienen un origen delictivo. Podemos decir entonces que, el blanqueo de capitales afecta al orden socioeconómico, pues consiste en el ingreso de grandes cantidades de capital generados sin los costes normales financieros y sin ninguna carga tributaria, dando lugar a un desequilibrio en las condiciones de competencia y mercado.

Sin embargo, hay que diferenciarlo de otros conceptos como el dinero negro. Mientras que la finalidad del blanqueo es conseguir la apariencia lícita de un capital que procede de actividades delictivas como el tráfico de drogas, contrabando, prostitución, etc., el dinero negro lo encuadramos en el ámbito de la evasión fiscal, es decir, la finalidad es la de evadir impuestos, puesto que el dinero que se defrauda, en este caso sí que procede de actividades legales. Entonces, ¿el delito fiscal puede ser considerado como delito previo al de blanqueo? En los últimos años, la jurisprudencia ha afirmado que la defraudación fiscal puede ser antecedente del delito de blanqueo, pues los bienes procedentes del delito fiscal pueden considerarse de origen delictivo grave constituyéndose el delito fiscal como delito previo al de blanqueo. Asimismo, este delito se diferencia del encubrimiento o la receptación como veremos más adelante.

En primer lugar, se abordará el tipo básico recogido en el **artículo 301** del Código Penal español, que dispone lo siguiente (el subrayado es propio):

1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y

acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

[...]

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.

De esta manera, el artículo 301 castiga al que adquiera, posea, utilice, convierta, transmita bienes, siempre y cuando conozca que tiene un origen delictivo, cometido por él o por otra persona, y al que oculte bienes o encubra su origen ilícito o ayude a otra persona que lo haga. Igualmente, el apartado 2 de este mismo artículo, castiga el encubrimiento u ocultación del verdadero origen de los bienes y de su procedencia ilícita, es decir, la colocación en el tráfico legal de los beneficios del delito.

Se configura así un delito, común, pues lo puede cometer cualquier persona, y como un delito de actividad, cuyo objeto es el beneficio procedente de un delito. Cabe apuntar que, al ser el blanqueo un delito autónomo, la prescripción de la conducta ilícita de la que procede el dinero no afectará la propia del delito de blanqueo.

En cuanto a cuál es el bien jurídico protegido, la doctrina está dividida en torno a esta cuestión. La mayor parte de la misma coincide en que se trata de, “el correcto funcionamiento del mercado y la circulación de capitales, bajo el control del poder tributario del Estado, todo ello sin perjuicio de que también se pretenda proteger la libre competencia y la Administración de Justicia, así como evitar el enriquecimiento con los beneficios obtenidos de la comisión de un delito precedente”¹⁶.

Respecto al sujeto activo, puede serlo cualquiera, incluyendo al que cometió el delito origen, o a la persona que le ayude, conociendo que los bienes objeto

¹⁶ Muñoz Conde, Francisco. “Derecho penal. Parte especial”. Ed. Tiranch Lo BLanch. Valencia, 2017.

tienen origen en una actividad delictiva y además actuar para ocultar dicho origen ilícito. Pero, ¿Quién es el sujeto pasivo? Se podría decir que lo es la sociedad.

Em todo caso, el tipo del artículo 301 lo que exige es que los bienes tengan su origen en un delito, no que sean ellos el objeto de un delito grave. Por tanto, a pesar de las transformaciones que puedan experimentar, los bienes no pierden su origen ilícito.

Por otro lado, la **Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales** también aporta una definición de este delito, que en su **artículo 1, apartado dos**, lo define de la siguiente manera:

2. A los efectos de la presente Ley, se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades:

a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes.

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado.¹⁷

De esta manera, se considera blanqueo, la conversión o transferencia, la ocultación, ocultación, encubrimiento, adquisición, posesión o utilización de los bienes a sabiendas de su origen ilícito, participación, asociación y tentativas de perpetrar, el autoblanqueo, así como **el hecho de ayudar o aconsejar a alguien para realizar o facilitar su ejecución.**

Por lo tanto, se pueden resumir que las conductas de blanqueo son las siguientes:

- A) Adquirir, poseer o utilizar bienes, sabiendo en el momento de la recepción de los mismos, que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
- B) Realizar actos dirigidos a ocultar el origen ilícito de bienes
- C) Ayudar a la persona o personas que han realizado la infracción a eludir las consecuencias.
- D) Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, conociendo su procedencia delictiva.

Cabe especial mención a la reforma por la LO 5/2010, pues introduce la nueva expresión “posea, [...] bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por el o por terceras personas”, siendo relevante ya

¹⁷ Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

que se puede apreciar la intención del legislador de introducir la posesión como conducta típica del blanqueo y permite considerar blanqueador a los responsables del delito origen de los bienes.

Además de estas dos normas principales que regulan y definen el concepto de blanqueo de capitales, existen otras normas relativas al mismo. Entre ellas se puede destacar:

- Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al SEPBLAC.
- III Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conocida como la IV Directiva.
- Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 d mayo de 2018, relativa a la prevención de la utilización de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conocida como la V Directiva.

5.3 TIPIFICACION

Como ya se ha visto anteriormente, el tipo básico del apartado primero del artículo 301 recoge la comisión dolosa, pero en el delito de blanqueo de capitales también se contempla la modalidad de comisión por imprudencia grave. Esta imprudencia suele ser cometida en ámbitos profesionales, debido a los nuevos sujetos activos que incluye la Ley 10/2010, como pueden ser los abogados.

Para los tipos dolosos, la pena que corresponde es la de privación de libertad de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Hay que puntualizar que, en cuanto al dolo, no tiene cabida en el art.301.1 y 2 del CP el dolo eventual, puesto que en este caso el sujeto considera el resultado como probable, y aunque no quiere producirlo, sigue actuando. En los casos de blanqueo de capitales quien comete dicho delito es conocedor absoluto de la procedencia delictiva de los bienes.

Por el contrario, la imprudencia grave se castiga en el apartado 3 del 301 con la pena de privación de libertad de 6 meses a 2 años y multa del tanto al triplo. Al contrario que con el dolo eventual, la imprudencia, de forma grave, si se contempla en el art.30.1.3. no se exige que se conozca la procedencia de los bienes, sino que esté en condiciones de conocerla solo con observar las cautelas propias de su actividad y haya actuado al margen de las mismas o incumpliendo los deberes de ciudadano que le eran exigibles y los que se le imponen normativamente.

En ambos casos, también cabría la responsabilidad civil de acuerdo con el artículo 122 CP.

Los párrafos 2º y 3º del artículo 301 y el artículo 302 recogen los tipos cualificados. Dependen de la procedencia del bien blanqueado, de si el reo pertenece a una organización dedicada al blanqueo o de si son o no persona jurídica. Así, establecen que en el caso de que los bienes esten relacionados con delitos de tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes, negociaciones prohibidas a los funcionarios, y contra la ordenación del territorio y el urbanismo, se impondrá la pena en su mitad superior.

Por otro lado, cuando el sujeto pertenezca a organización dedicada al blanqueo se impondrán las penas del artículo 301 en su mitad superior, salvo los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones que entonces se aplicara la pena superior en grado (ART.302.1 del CP).

Cuando se trate de persona jurídica, se impone la pena de multa de 6 meses a 2 años cuando la pena prevista para la persona física sea prisión de menos de 5

años, y multa de 2 años a 5 años si la pena prevista para la persona física es de más de 5 años de prisión (ART.302.2 del CP).

Además, el apartado primero prevé la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de uno a tres años, el juez o tribunal así lo decidiera, dependiendo de la gravedad del hecho y las circunstancias personales del reo. Y el apartado 5 del mismo artículo dispone que serán decomisadas las ganancias adquiridas por el culpable.

Como ya se ha adelantado, esta redacción del art.301 del CP amplía el tipo delictivo, y algunos autores lo consideran una extralimitación, al incluir los términos “poseer” o “utilizar”. Además, cabe destacar el cambio de la palabra “delito” por “actividad delictiva”, esto conlleva a incluir en el tipo de delito precedente aquellos de cualquier gravedad y no, como ocurría con la anterior redacción, solo los delitos graves. Esta expansión es la consecuencia de la adaptación y actualización de la normativa penal española a la normativa internacional sobre blanqueo de capitales. En relación con ello, Gutiérrez Rodríguez apunta que “este exceso legislativo viene a vulnerar una serie de principios limitadores del derecho penal en su vertiente de *ius puniendi*, como los principios de proporcionalidad, *non bis in idem* y lesividad”.

También constituye una novedad la agravación del párrafo 2º del apartado primero de este artículo, incluyendo los delitos de los capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX (malversación, tráfico de influencias, cohecho...). De esta manera, se pretende frenar esa corrupción, por parte de personas del ámbito político entre otros, que tanto auge ha tenido en los últimos años.

Por último, se puede destacar la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, en el apartado 2 del art.301. Así, esta inclusión permite castigar también a aquellas personas jurídicas a través de las cuales se hayan cometido los delitos.

Una vez hemos estudiado su concepto y tipificación, podemos entrar en el estudio de las fases de blanqueo. Siguiendo la doctrina establecida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), deben distinguirse tres fases o etapas del blanqueo de capitales:

1. **Colocación** (*placement*): En esta primera fase se produce la introducción del efectivo en el sistema financiero para desvincularlo del delito de origen. Lo más habitual en esta fase es que realicen ingresos en entidades financieras, o utilicen juegos de azar como loterías o casinos.
2. **Conversión** (*layering*): en esta fase se produce la transformación o encubrimiento de caudales mediante la compra de bienes inmuebles, realización de transferencias para dificultar el rastro del dinero o transferencias bancarias entre sociedades nacionales o internacionales.
3. **Reintegración** (*integration*): en esta fase afloran ya los caudales limpios. Se lleva a cabo mediante la compraventa de bienes, utilización de empresas pantalla o ficticias situadas en paraísos fiscales.

En otro orden de cosas, hay que diferenciar el blanqueo de capitales de delitos como la receptación o el encubrimiento:

Las diferencias con el encubrimiento son el bien jurídico protegido y la autoría del delito. Para que sea blanqueo de capitales, la ley exige que el delito previo sea cometido por él o por terceros. El bien jurídico protegido en el encubrimiento consiste en la correcta acción de la Administración de justicia, mientras que en el blanqueo de capitales es el buen funcionamiento del mercado y la circulación de capital.

Respecto a la receptación, se diferencia del blanqueo en que aquella requiere que el delito previo tenga carácter económico, mientras que en el blanqueo no se exige que el delito previo sea de algún tipo concreto. Además, la receptación exige ánimo de lucro, mientras que el blanqueo no se precisa ni se excluye. Por tanto, cuando exista ánimo de lucro y se trate de un delito socioeconómico, se excluiría el blanqueo de capitales, siendo de apreciación el delito de receptación.

En la receptación se exige que el receptor no haya participado en el delito previo ni como autor ni como cómplice, mientras que en el blanqueo se incluye el autoblanqueo, es decir, encubrimiento de las propias actividades.

En relación al autoblanqueo, cabe traer a colación la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal señala que el simple hecho de “adquirir,

poseer, utilizar, convertir o transmitir” de cualquier modo ganancias o bienes, a sabiendas de que estos proceden de una actividad delictiva, no es suficiente para la comisión de un delito de blanqueo de capitales doloso. Es necesario, además, que el autor actúe con la finalidad de ocultar o encubrir dichos bienes. De esta manera, se evita la vulneración del principio *non bis in idem* cuando se castiga tanto el delito precedente como el delito de blanqueo.

Así establecía: “Con esta interpretación, más restrictiva, evitamos excesos, como los de sancionar por autoblanqueo al responsable de la actividad delictiva antecedente, por el mero hecho de adquirir los bienes que son consecuencia necesaria e inmediata de la realización de su delito. O la de considerar blanqueo la mera utilización del dinero correspondiente a la cuota impagada en un delito fiscal, para gastos ordinarios, sin que concurra finalidad alguna de ocultación ni se pretenda obtener un título jurídico aparentemente legal sobre bienes procedentes de una actividad delictiva previa, que es lo que constituye la esencia del comportamiento que se sanciona a través del delito de blanqueo.”¹⁸

En conclusión, el delito blanqueo de capitales se puede cometer por distintos medios, entre los que destacan el sector inmobiliario, el manejo del dinero en efectivo, o el dinero electrónico, pero también facilitan el blanqueo la falsa facturación entre empresas vinculadas, alterando los precios de su mercancía. Ciertamente, la legalización de grandes masas de bienes mediante las prácticas blanqueadoras produce un efecto negativo en la economía de un país como la inestabilidad de los tipos de cambios y de interés, aumento del déficit o el desequilibrio del sistema económico financiero. Sin olvidarnos de otros efectos como los daños a la salud debido a las enfermedades que produce el consumo de sustancias estupefacientes de donde proceden los beneficios, así como el aumento de la realización de los delitos previos al blanqueo. Y esto inevitablemente conduce a una pérdida de confianza en el sistema financiero del país.

En definitiva, debido al carácter globalizador del blanqueo de capitales, nos encontramos ingentes cantidades de dinero circulando entre países perjudicando la economía global, produciendo inestabilidad en los precios, inflación de bienes

¹⁸ Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015, de 29 de abril.

inmuebles, y en definitiva desfavoreciendo y perjudicando a la sociedad en su conjunto.

5.4 LA LEY 10/2010 DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Fruto de la adaptación y actualización de la normativa española a las exigencias de la normativa internacional en materia de prevención de blanqueo de capitales, se publicó el 29 de abril de 2010, la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se trata como bien establece su preámbulo de la transposición de la Directiva 2005/60/CE o Tercera Directiva, de 26 de octubre de 2005. Esta directiva incorpora las Recomendaciones del GAFI, notas muy básicas que deben ser desarrolladas por los Estados miembros. Esta Directiva ha quedado derogada, pues recientemente se ha transpuesto la conocida como V Directiva al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril. No obstante, no ha traído modificaciones relevantes para los profesionales de la abogacía.

El objeto de la Ley 10/2010 es, según su artículo 1.1, la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica. En su artículo 2 establece todos los sujetos que están obligados por dicha Ley, entre los que nos interesa los abogados que se incluyen en su apartado ñ) directamente y en su apartado c) de forma indirecta, al disponer respectivamente lo siguiente (el subrayado es propio):

ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

*o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.*¹⁹

A estos sujetos obligados se les exige unas diligencias debidas como la identificación de los intervinientes en cualquier operación, la recopilación de la información necesaria a fin de conocer su actividad profesional, comprobando la veracidad de dicha información, o el seguimiento continuo de las relaciones de negocio. El artículo 7 de esta Ley, señala que, en todo caso, los sujetos obligados aplicaran las medidas de diligencia debida cuando concurren indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, con independencia de cualquier excepción, exención o umbral, o cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos obtenidos con anterioridad. Y añade en su apartado segundo que, no solo se aplicaran estas medidas previstas a los nuevos clientes sino también, a los clientes existentes, de acuerdo con un análisis del riesgo. El apartado 3 del mismo artículo establece que estos sujetos obligados no establecerán relaciones de negocio ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en esta Ley.²⁰ Cuando se aprecie la imposibilidad en el curso de la relación de negocios, los sujetos obligados pondrán fin a la misma, procediendo a realizar el examen especial a que se refiere el artículo 17 (cuando se trata de operaciones complejas, inusuales o sin un propósito económico lícito aparente, o que presente indicios de fraude).

Tras el examen referido en el artículo 17, se deberá comunicar, por iniciativa propia, al SEPBLAC cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo precedente,

¹⁹ Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

²⁰ Artículo 7 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del terrorismo.

exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y así lo dispone el artículo 18 de la misma ley.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010 genera una responsabilidad administrativa y en algunos casos responsabilidad penal. Pero la obligación de esta comunicación puede crear problemas en relación a la protección de datos, por ello la propia ley exime, en su artículo 23, a los obligados de dicha responsabilidad en tanto que señala que la comunicación por los sujetos obligados a las autoridades competentes no constituirá violación de las normas sobre protección de datos.

Otra de las exenciones, o no sujeción, mejor dicho, es la recogida en el artículo 22 que dispone que los abogados están exentos de las obligaciones establecidas en los artículos 7.3, 18 y 21, en la que se entrará más adelante.

Del mismo modo, la ley establece una serie de infracciones que califica en muy graves, graves y leves, y sanciones pecuniarias que van desde los 60.000 euros como máximo para infracciones leves hasta 1.500.000 euros o el duplo del importe de la operación para las infracciones muy graves.

A colación de todo lo anterior, hay que mencionar el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010. El mismo incluye las recomendaciones del GAFI de 2012 y cobra importancia el nivel de riesgo.

Finalmente, cabe mencionar que recientemente se ha promulgado la Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conocida como la V Directiva, mediante la que se modifica la IV Directiva. Esta Quinta Directiva refuerza las medidas de diligencia debida que se deberán aplicar en relación con transacciones con países del alto riesgo. Pero como se mencionaba al comienzo del epígrafe, no ha traído modificaciones relevantes para los profesionales de la Abogacía.

6. LA PROBLEMÁTICA DEL ABOGADO

6.1 LA FIGURA DEL ABOGADO FRENTE AL BLANQUEO DE CAPITALS

Desde la entrada en vigor de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, el abogado, así como su deber de secreto profesional han sufrido un cambio importante. Esta Ley impone la obligación en determinadas situaciones a vulnerar dicho secreto profesional para colaborar con las autoridades con el fin de prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de nuestros clientes. Entre esos deberes podemos destacar la comunicación y colaboración con los órganos competentes para la prevención del blanqueo ante sospechas de actividades que pudieran constituir aquel delito cuyo culpable pueda ser nuestro cliente.

Como se ha observado con anterioridad, las normas sobre blanqueo de capitales prescriben la obligación de **comunicar al SEPBLAC cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales**, conforme a los términos indicados en el articulado de la Ley 10/2010.

Como se apuntaba en el epígrafe anterior, es en el **artículo 2, apartado ñ)** donde incluye expresamente a los abogados como sujetos obligados, y tácitamente en su apartado o).

La normativa de prevención de blanqueo de capitales colisiona con la pieza fundamental de la abogacía: el deber de secreto profesional basado en la confianza abogado-cliente sin la que nuestra profesión pierde todo su sentido.

Al ser el delito de blanqueo de capitales un delito común, lo puede cometer cualquiera, como ya hemos visto anteriormente. Por lo tanto, la responsabilidad penal del abogado en el ejercicio de su profesión vendrá dada bien por haber sido autor, coautor, cooperador necesario, cómplice o encubridor.

Es importante conocer el significado/tratamiento que ha de darse al término “asesoramiento” que se menciona en el apartado ñ) cuyo tenor literal es el siguiente:

ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a [...].

Sánchez Stewart diferencia entre asesoramiento jurídico y asesoramiento de gestión. Entiende por asesoramiento jurídico, de acuerdo con el art.542.1 LOPJ, aquel consistente en determinar la situación jurídica del cliente y en ejercer la defensa en acciones judiciales. De esta manera, formará parte del secreto profesional, ahora bien, si la finalidad del asesoramiento es el blanqueo o el abogado conoce la intención del cliente de blanquear para lo que solicita su asesoramiento, el secreto profesional no tiene cabida.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), reconoce que existe confusión respecto al concepto de asesoramiento, y ha de resolverse atendiendo al momento en que se presta. Si el asesoramiento es posterior a la ejecución de alguna de las actividades que recoge la Ley, estará protegido por el secreto profesional. Ahora bien, si el asesoramiento se presta con anterioridad a aquellas, y al asesoramiento se suma una gestión, no podrá alegarse el secreto profesional.²¹

Además, la falta de diligencia impuesta a la Abogacía puede originar otra imputación del delito de blanqueo. Así, el apartado 3 del artículo 301 del CP prevé la imprudencia grave, en la que puede incurrir el profesional de la abogacía. En este caso no es exigible que conozca la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas solo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de las mismas. La imprudencia exige, en todo caso, la omisión completa o de la mayoría de las cautelas, entendiéndose que cualquier persona en dicha situación podría conocer con facilidad el origen delictivo de los bienes.

Así, la Sentencia del TS 412/2014, de 20 de mayo, establece que “no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas solo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales

²¹ Consejo General de la Abogacía Española. “Recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales”.

cautelos o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuaciones, le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia no estuviera claramente establecida”. Al respecto, la Convención de Viena de 1988 y la mayor parte de la doctrina establecen que el momento del conocimiento del ilícito se produce en el momento de recibir los bienes.

Algunos autores critican las normas sobre prevención de blanqueo de capitales, pues parece que se quiere convertir a los abogados en auténticos detectives, pero, sin embargo, no disponen de los medios necesarios, asumiendo una función cuasi funcionarial cuando la Ley 10/2010, de 28 de abril, les impone una serie de deberes como la colaboración con los órganos competentes de prevención de blanqueo de capitales, que ya ha sido mencionada. Entonces, ¿Qué ocurre con la confidencialidad propia de la relación abogado-cliente?²²

Es evidente que la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales ha colisionado con el núcleo esencial de la profesión de abogado, sin por supuesto quedar exenta de polémica entre los abogados. El deber de secreto unido a la obligación de prevenir el blanqueo de capitales, y el deber de información, vulneran los fundamentos del Estado de Derecho.

En definitiva, los abogados son sujetos obligados en una serie de supuestos *numerus clausus*, de acuerdo con la Ley 10/2010, por tanto, no se debe de hacer una interpretación amplia sobre los mismos ya que nos encontramos ante un derecho constitucional como es el derecho de defensa.

En conclusión, se trata de diferenciar cuándo el asesoramiento legal puede significar el favorecimiento del lavado de dinero y conllevar una responsabilidad para el letrado, así como de establecer cuándo ha de tener lugar la colaboración de los abogados en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales. Serán estos aspectos en los que se centrarán los siguientes epígrafes, sin olvidar que el secreto profesional no existe en beneficio de quien ejerce la Abogacía sino para proteger el derecho de defensa y la intimidad del cliente.

²² Fernández Bermejo, Daniel. "El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional". *Revista Aranzadi Doctrinal*, N.º 8. Septiembre 2017.

6.2 COLABORACION DE LOS ABOGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Los artículos 7.3, 18 y 21 de la Ley 10/2010 señalan las **obligaciones de información y colaboración con las autoridades** mediante la comunicación de cualquier hecho u operación, incluso mera tentativa, respecto al que exista **indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo**.

No obstante, el **artículo 22** de dicha ley establece una excepción mediante la cual libera de esta obligación a los abogados en cierta ocasión. Este artículo dispone lo siguiente (el subrayado el propio):

Los abogados no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos 7.3, 18 y 21 con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.

Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, los abogados guardarán el deber de secreto profesional de conformidad con la legislación vigente.²³

Por tanto, habrá que tener muy claro cuáles son las modalidades del ejercicio de la abogacía sujetas a esta obligación, para así poder diferenciar cuando surge la obligación de colaboración con las autoridades, y cuando no.

Entonces, si el cliente le expone al abogado una idea y le indica cual es el proceso que va a utilizar, es el cliente quien ha concebido la operación. Ahora bien, si ignorando el procedimiento, el cliente plantea a su abogado una idea de lo que quiere conseguir y el abogado colabora con el cliente y es **él quien concibe la**

²³ Artículo 22 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

operación dentro del asesoramiento prestado, sería sin ninguna duda, cooperador necesario.

Sánchez Stewart señala muy acertadamente: “el abogado se mueve en un terreno muy complicado. Si comunica al SEPBLAC lo que no debe comunicar puede cometer un delito de relevación de secretos y si no comunica lo que debe puede incurrir en multas cuantiosísimas. Los conceptos de indicio o certeza que utiliza la ley son muy subjetivos. Lo que para alguien puede parecer sospechoso, por ser suspicaz, para otro puede ser perfectamente normal.”²⁴

Ciertamente, el abogado se halla ante dos deberes: no prestar asesoramiento para el blanqueo, derivado del art.301 del CP, y el de no revelar secretos, derivado del art.199 del CP. Además de la obligación de informar cuando sepa que el cliente ha solicitado asesoramiento jurídico con el fin de blanquear dinero.

Es evidente que se imponen al abogado una serie de obligaciones exigentes y que atentan gravemente contra el secreto profesional, pero también contra el derecho a la defensa, contra el de la tutela judicial efectiva, y al de un proceso con todas las garantías, como si de fichas de dominó se tratara.

En conclusión, ¿está justificada la intervención del derecho penal o se trata de una intervención desproporcionada? Lo que sí que está claro es que el equilibrio entre estos deberes es cuanto menos complicado de conseguir, y sitúa al profesional de la abogacía, como si de un equilibrista se tratara, en una cuerda intentando no caer en ningún incumplimiento de todos los deberes que se le imponen.

6.3 INTERVENCIONES DEL ABOGADO SUJETAS A RESPONSABILIDAD

El artículo 2.2 de la Ley 10/2010 recoge las modalidades de actuación profesional del abogado sujetas a responsabilidad:

- Operaciones relacionadas con la compraventa de bienes inmuebles.
- La gestión de fondos.

²⁴ Sánchez Stewart, Nielson. “Abogados: blanqueo de capitales <<ataques al secreto profesional>>”. Revista Economist & jurist.

- Regulación para la creación, funcionamiento o gestión de empresas, y funcionamiento o gestión de sociedades.
- Actuaciones por cuenta de clientes en operaciones financieras o inmobiliarias.

En estos casos, si el asesoramiento tiene naturaleza jurídica, esto es, informar sobre los derechos y las obligaciones que pueda tener, está claro que lleva a cabo una actuación profesional de las que se citan en la LOPJ en su artículo 542.1 y 3, y en consecuencia debe guardar secreto.

En cambio, cuando la conducta es realizada por quien tiene la condición de abogado, pero a través de una actuación que no constituye ni dirección ni defensa en un proceso, ni asesoramiento jurídico, no estarán sometidos al deber de secreto establecido en el art.542 LOPJ.

El abogado que brinda asesoramiento jurídico en las operaciones referidas, continúa estando obligado al deber de secreto, aun cuando una Ley ordinaria le ordene efectuar unas comunicaciones a la Administración. De realizar tales comunicaciones, el letrado vulnerará el deber de secreto e incurrirá en el delito de revelación de secretos del art. 199.2 del CP.

Un tratamiento distinto se les da a los abogados que ejercen la defensa de sus clientes en procedimiento judiciales o administrativos. A ellos no se les impone las obligaciones establecidas para los abogados. Además, en su artículo 22 se prevé su exclusión como hemos indicado en el apartado anterior.

Al respecto nuestro Tribunal Supremo en su sentencia 483/2007 de 4 de junio, sobre conocimiento del origen ilícito de los bienes, señala que no es necesario que sepa sobre dicho origen, sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede un delito (por su cuantía, por la contraprestación...).

Si seguimos la doctrina del nuestro Alto Tribunal, no sería necesaria la una condena previa efectiva, y sería suficiente demostrar que los bienes proceden de una actividad ilícita. De esta manera, la Sentencia de nuestro TS 796/2010 de 17 de septiembre, señaló que “la jurisprudencia ha establecido que no es preciso acreditar una condena anterior por el delito de que proceden los bienes o dinero

lavado, siendo bastante con establecer la relación con actividades delictivas y la inexistencia de otro posible origen del delito. Dicho de otra forma, que dados los indicios la conclusión razonable sea su origen delictivo”. La STS 628/2011 de 22 de junio, recuerda que “es doctrina reiterada la que indica que no es necesario que exista un pronunciamiento judicial precedentes que declare como delito la actividad de la que proceden los bienes, lo que, en realidad, equivale a la inconcreción del origen delictivo, puesto que si no existe condena firme sobre las actividades productoras de los bienes resultaría incongruente afirmar el carácter delictivo”.

En relación, la Sala Segunda del Tribunal Supremo establece los indicios más frecuentes, que son²⁵:

A) El afloramiento de dinero de cantidades importantes, respecto del que no se da justificación suficiente.

B) Utilización de dicho dinero en operaciones con alguna irregularidad, ajena a la práctica común, tales como manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo, empleo de testaferros, aperturas de cuentas o depósitos en bancos cuya ubicación se encuentra en país distinto del de residencia del titular.

C) La existencia de circunstancias reales que relacionen al poseedor de ese dinero con el tráfico de sustancias estupefacientes, permitiendo asegurar la vinculación entre ambos delitos.

Podemos observar en cuanto a esta obligación de comunicación de actividades sospechosas que el abogado esta una situación complicada que si comunica lo que no debe puede cometer un delito de revelación de secretos (art. 199 CP) y si no comunica lo que debe se enfrenta a cuantiosas multas.

Por otro lado, el abogado no debe olvidar que puede incurrir en el delito de blanqueo de capitales incluido en el tipo de comisión por omisión, es decir no existiendo dolo, y preservando el deber de secreto profesional, no comunica a la autoridad competente una información que debería de haber facilitado. De acuerdo con el artículo 301 del CP que hemos visto en el epígrafe 5.3, la conducta

²⁵ Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de octubre de 2004 (RJ 2004/6557)

que consiste en poseer los bienes conociendo su procedencia ilícita es la que más incidencia tiene en la profesión de la abogacía. Y esto es así porque el dinero con el que se realizara la satisfacción de sus honorarios por parte del cliente puede tener un origen delictivo, constituyendo una forma blanqueadora de acuerdo con el Código Penal español. Podría contemplarse como una de las formas previstas en el artículo 301 CP el cobro de honorarios a sabiendas de la ilicitud del dinero con el que se han satisfecho. No obstante, deberán darse todos los elementos del delito. Así, cualquier operación remuneratoria no puede *per se* constituir un delito de blanqueo de capitales. En este sentido, antes de la firmeza de la sentencia, el abogado se considerará tercero de buena fe no responsable del delito. Por el contrario, cuando el abogado realice una simulación en la facturación de sus honorarios encubriendo así el origen ilícito de los bienes, estaría cometiendo un delito de blanqueo de capitales.²⁶

No obstante, si no se demuestra que los honorarios recibidos proceden del blanqueo se considerará tercero de buena fe y no responsable de dicho delito. Una vez **firmada** la sentencia y declarado **culpable** el cliente, no se podrá cobrar la minuta con el capital que constituye el objeto del delito, salvo en aquella cantidad que asegure el mínimo previsto en las Normas Orientadoras de Honorarios.

Sabiendo el origen ilícito del dinero el Letrado no debe percibir sus honorarios del mismo. En caso contrario, en aquellos casos en los que, sin tener conocimiento sobre el origen de los fondos, no conoce la procedencia de los mismos con los que se va a proceder a satisfacer sus servicios, prevalece el derecho de defensa, la libre elección del abogado y el libre ejercicio de la profesión, no pudiendo integrar dicha percepción el tipo penal.

Cuando el cobro de honorarios está encuadrado en los estándares normales respecto a su cuantía, y cuando se ha realizado un examen de la situación por parte del abogado, el abogado podrá asumir la defensa y el pago de sus honorarios.

Finalmente, y una vez más, se plantea aquí la cuestión sobre hasta qué punto corresponde a un abogado conocer, por ejemplo, qué uso le va a dar un cliente a

²⁶ Fernandez Bermejo, Daniel. "El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional". Revista Aranzadi Doctrinal. Nº 8; septiembre 2017.

una sociedad que ha constituido para él, o con el asesoramiento que le ha proporcionado en un momento dado, o si los fondos con lo que satisface sus honorarios proceden de alguna actividad delictiva. La conclusión es la misma: se puede decir que se pretende colocar al abogado en una posición complicada que le exige unos deberes como si de un detective se tratase, sin tener los medios necesarios para serlo.

6.4 EXCEPCIONES AL DEBER DE SECRETO EN EL AMBITO DEL BLANQUEO DE CAPITALS

Como se ha ido analizando a lo largo de este trabajo, existe una duda muy razonable en relación a la conciliación de las obligaciones de colaborar contra el blanqueo de capitales por parte de los abogados, el secreto profesional y el derecho a la tutela judicial efectiva.

El secreto profesional consiste en un derecho y un deber reconocido por numerosas normativas como la CE, LOPJ, LECRIM, Estatuto de la Abogacía o el Código Deontológico. No obstante, encuentra varias excepciones como se ha observado al comienzo del trabajo.

Ahora, se desarrollará la excepción que supone la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se trata de una excepción específica al secreto profesional, pues, como se ha señalado con anterioridad, obliga a los profesionales a dar cuenta de las operaciones que estimen sospechosas cuando participen en la concepción, asesoramiento, o realización de transacciones por cuenta de sus clientes relativas a la compraventa de inmuebles, gestión de fondos, apertura o gestión de cuentas bancarias, organización y gestión de empresas, entre otras. Además, colaborarán con el SEPBLAC y comunicarán por iniciativa propia y sin necesidad de comunicación al cliente, los hechos u operaciones sobre los que exista indicio o certeza de relación con el blanqueo de capitales.

Nuestro Tribunal Supremo, en su sentencia 797/2015, de 24 de noviembre, señaló que ningún abogado tiene obligación de declarar sobre los hechos o noticias conocidos a través de su intervención profesional en el proceso. Ahora

bien, si el abogado conoce por cualquier otro medio más información, por medio de otras personas o por el examen de documentos, esta información no estará amparada por el secreto profesional.

Por tanto, será secreta aquella información que el cliente comunica a su abogado, pero no el conocimiento que éste obtenga mediante una vía distinta a la comunicada por el cliente. Pero, ¿qué ocurre cuando el cliente imputa a su propio abogado? Hay que tener en cuenta que la inobservancia de las obligaciones previstas en la Ley 10/2010 pueden dar lugar, como se ha observado, a responsabilidad penal por imprudencia, de acuerdo con el art.301.3 del CP.

Es interesante traer a colación lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sostiene. Para el TEDH, exigir a los abogados que notifiquen las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales no supone una intromisión ilegítima desproporcionada en su derecho a mantener el secreto de la información recabada en el ejercicio de su profesión, porque el imponer a los letrados estos deberes sirve al interés general. Este Tribunal afirma que los abogados desempeñan un papel fundamental en una sociedad consistente en contribuir a una apropiada administración de justicia. Por lo tanto, la confidencialidad de sus relaciones no es absoluto.²⁷

En definitiva, no toda la información que recibe un letrado tiene protección penal. El deber de secreto profesional prevalecerá únicamente cuando el abogado lleve a cabo actividades propias de un letrado, que justifiquen la confidencialidad. Y esas labores propias de un letrado se refieren a la defensa, representación técnica y asesoramiento jurídico. Únicamente esas tres funciones situaran al abogado como confidente necesario.

7. JURISPRUDENCIA Y CASOS RELEVANTES

7.1 MICHAUD VS FRANCIA

²⁷ Unión europea. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de 6 de diciembre de 2012. Caso Michaud contra Francia (JUR/2012/382735).

Es interesante hacer mención aquí al tratamiento jurídico que ofrece el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) respecto del objeto de este trabajo. El asunto *Michaud contra Francia* (Sentencia del TEDH, de 6 de diciembre de 2012) nos ofrece una interesante valoración sobre la relación abogado-cliente, la confidencialidad y el secreto profesional. Esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos expone el conflicto entre el deber de denuncia o información de operaciones sospechosas y el derecho de confidencialidad de la relación abogado-cliente, y aborda la compatibilidad de dichos deberes con el derecho del libre ejercicio de la profesión.

Los antecedentes de hecho comienzan por la demanda que interpone un abogado, Patrick Michaud, contra la República Francesa, solicitando que se anularan la normativa del Consejo Nacional de la Abogacía sobre procedimientos internos para cumplir con las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya que vulneraban el artículo 8 del CEDH. Además, solicitaba que se alzara una cuestión prejudicial acerca de su compatibilidad con la Directiva sobre blanqueo de capitales al Tribunal de Justicia. Ante la negativa del Consejo de Estado de dicha elevación, Michaud acudió al TEDH, ya que consideraba que aquella normativa representaba una amenaza contra sus derechos y el secreto profesional que debía prevalecer en la relación abogado-cliente.

Ciertamente, el artículo 8 del CEDH protege la confidencialidad de las comunicaciones y obligar al abogado a revelar información sobre su cliente supone una vulneración de su derecho a la vida privada. Pero el TEDH mantiene que exigir a los abogados la notificación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales no supone una intromisión ilegítima desproporcionada en su derecho de secreto sobre la información obtenida en el ejercicio de su profesión, porque imponer a los abogados estos deberes sirve a un interés general esencial. Continúa diciendo que, la normativa francesa no vulnera el secreto profesional, porque la obligación de informar se limita a aquellos casos en los que su actividad no está relacionada con la defensa jurídica, y el propio Código monetario y financiero excluye de la obligación de informar cuando se esté en el seno de un procedimiento judicial.

En consecuencia, el TEDH afirma que el privilegio de la confidencialidad tiene algunos límites. Valora necesario hacer una ponderación entre la importancia de la confidencialidad y el interés público inherente a la lucha contra el blanqueo de capitales. En este sentido, existen dos pilares sobre los que el TEDH asentó su fallo: “el papel fundamental que los abogados desempeñan en una sociedad democrática, contribuyendo a una adecuada administración de justicia, por lo que el secreto profesional no es absoluto; y que el abogado queda obligado a informar, en el marco de actividades que no son las estrictamente propias de un letrado, o de aquellas que son similares a las propias de otras profesiones, las cuales también están sujetas a la misma obligación.”

La Sentencia del TEDH, en conclusión, establece que la obligación de informar, en los términos que establece la normativa, no interfiere desproporcionadamente en las obligaciones profesionales de los abogados y no se ha violado el artículo 8 del CEDH.

En definitiva, se puede decir que la interpretación del TEDH se trata de una interpretación restrictiva del derecho a la confidencialidad, pues se pronunció a favor de proteger el deber y derecho de confidencialidad de la información intercambiada entre un abogado y su cliente, pero lo limitó a los casos en los que el letrado actúa como defensor.

7.2 SENTENCIA AKZO

El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha mostrado una postura un tanto polémica respecto a algunos aspectos de los abogados internos (abogados *in-house*) ya que gozan de menos privilegios que los abogados que ejercen en despachos externos.

Los antecedentes de hechos en este caso consisten en un registro por la Comisión Europea en el que se habían requisado diversos documentos que la empresa consideraba amparados por el secreto profesional ya que se trataba de una serie de correos electrónicos intercambiados entre el director de la empresa y su abogado, empleado en el departamento jurídico de la empresa. Los demandantes alegaron que los correos electrónicos intercambiados entre abogado y director debían gozar de la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre

abogado-cliente. Para el Tribunal de primera instancia, el asesoramiento y defensa jurídica del abogado interno estarían viciados por la falta de independencia de este frente a su cliente por el riesgo de que la intervención del abogado interno pueda formar parte de la estrategia infractora de la empresa asesorada por él. Ello implica considerar que la sujeción laboral contamina su función específica de asesoramiento y defensa. Su “sumisión jerárquica” impediría el ejercicio libre de su actividad profesional.

El TJUE, en fecha 14 de septiembre de 2010, desestima el recurso de apelación e insiste en que el requisito de independencia implica que no existe ningún tipo de relación laboral entre el abogado y su cliente, de modo que el privilegio de la confidencialidad no se extiende a las comunicaciones mantenida en el seno de una empresa.

En conclusión, la sentencia del caso Akzo, dictada en septiembre de 2010, establece que para los abogados de empresa no existe secreto profesional. A causa de ello, estos profesionales deben declarar sobre los hechos que conozcan, simplemente por hecho de estar sujetos a una relación laboral que impediría su independencia.

Es cierto que cada Estado aplica un argumento diferente, creando una gran inseguridad jurídica. Por ello, se debería recurrir a un único criterio en aras a la armonización de los ordenamientos jurídicos. La independencia del abogado de empresa está en el fondo del debate y, en definitiva, para que el buen asesoramiento de una empresa se necesita una relación de confianza con el abogado de empresa y cuya confidencialidad podría limitarse cuando de la misma se dé un uso abusivo.

7.3 SENTENCIA 200/2011, DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA, DE 31 DE MARZO

Los antecedentes de hecho de esta sentencia versan sobre un despacho de abogados cuya especialidad era la inversión en inmuebles por parte de extranjeros. Lo fundamental era preservar el anonimato de los inversores extranjeros y delincuentes. Para llevarlo a cabo idearon un sistema consistente

en la creación de sociedades de responsabilidad limitada cuyas participaciones ostentarían los propios inversores a través de sociedades extranjeras constituidas en Delaware, ya que su legislación permite que los beneficiarios no figuren en las escrituras. Esta sociedad de Delaware sería titular del 99% de las participaciones de la sociedad de responsabilidad limitada española, garantizando de esta manera el anonimato de los clientes.

Según dice la sentencia "...Cuando se constituía una sociedad española, se abría una cuenta en una entidad bancaria en España al objeto de canalizar los fondos necesarios para ello.

De igual forma, y con carácter previo, se procedía a la apertura de otra cuenta bancaria en España para ingresar los fondos que la sociedad de Delaware aportaría como pago de las participaciones de la sociedad española, quedando autorizado para su uso, bien el acusado, bien alguno de sus colaboradores. Dichos fondos eran remitidos a la cuenta de la sociedad norteamericana por transferencia bancaria."²⁸

Como bien señala la sentencia "[..] La investigación llevada a cabo ha revelado que el acusado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, 143 de las cuales eran del estado norteamericano de Delaware y 39 de territorios considerados paraísos fiscales (de ellas 25 de Gibraltar, 3 de en la Isla de Man, 3 en Panamá y 2 en Islas Vírgenes Británicas)."

Finalmente, el Tribunal Supremo en su sentencia 975/2012, de 5 de diciembre, condenó al abogado a 5 años y 6 meses de pena privativa de libertad y al pago de una multa de más de 1 millo de euros, como autor de un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.

Con la Ley 10/2010 lo que se quiere evitar es exactamente esto, que un abogado se convierta en colaborador de su cliente para blanquear dinero y dificulte una investigación al respecto.

²⁸ Sentencia 200/2011, de la Audiencia Provincial de Málaga, de 31 de marzo.

8. DERECHO COMPARADO

La transposición de las Directivas sobre blanqueo de capitales a los ordenamientos jurídicos de cada Estado no se ha realizado de la misma manera en todos. Desde una perspectiva comparada, en este epígrafe se va a abordar la aplicación de la normativa supranacional sobre blanqueo de capitales en los códigos de los países europeos.

En todas las legislaciones se ha intentado adaptar la regulación en la lucha contra el blanqueo de capitales, y uno de los aspectos que más polémica ha suscitado es la vinculación del blanqueo al delito previo. Esta conexión es muy difícil de probar, pero se trata de un elemento indispensable para la tipicidad de la conducta.

En Alemania, al igual que en nuestro país el delito fiscal está admitido con posible delito previo al blanqueo. Pero, al contrario que en el ordenamiento jurídico español, el autoblanqueo no es punible. El código penal alemán castiga el delito de blanqueo de capitales con penas de prisión de 3 meses a 5 años.

En Francia, también está aceptado el delito fiscal como delito previo. Pero la regulación penal francesa no castiga la imprudencia, al contrario que el código penal español, que la regula como se ha visto en el apartado 3 del art. 301. En Francia, el tipo básico se castiga con pena privativa de libertad de hasta 5 años y multa de 375.000 euros. No obstante, si se ha cometido por banda organizada la pena se agrava con prisión de hasta 10 años y multa de 750.000 euros. El autoblanqueo, al igual que en Alemania, no es punible.

En Italia, el blanqueo de capitales es una gran preocupación debido al habitual tráfico de estupefacientes que sufre el país. En Italia, a diferencia de España, Alemania o Francia no existe ninguna normativa referida a la obligación de los profesionales de la abogacía para la prevención del BC. El código penal italiano establece penas de prisión de 4 a 12 años para quienes cometan este delito. Pero el autoblanqueo, como en Alemania y Francia, tampoco es punible en Italia. No obstante, el delito fiscal sí está previsto como delito previo. Y en Italia, como en España, no se exige condena por el delito precedente para juzgar por el delito de blanqueo.

En Dinamarca, el código penal danés incluye el delito de blanqueo de capitales dentro de la receptación, y establece penar de prisión de hasta 6 años. Además, castiga la imprudencia con hasta 6 meses de prisión. En Dinamarca, tampoco es delito el autoblanqueo, y el delito previo puede ser cualquier sin necesidad de condena previa por el mismo para el enjuiciamiento del delito de blanqueo.

En Portugal, la mayoría del dinero blanqueo procede del tráfico de sustancias estupefacientes. La legislación portuguesa incluye el delito de BC dentro de los delitos contra el Estado y lo condena con penas de prisión de 2 a 12 años, no pudiendo superar la pena prevista para el delito precedente. A diferencia de los anteriores países, Portugal si considera el autoblanqueo como una conducta punible. Además, no exige condena previa por los delitos precedentes para poder juzgar por el delito de blanqueo de capitales.

En conclusión, la armonización del derecho penal en materia de blanqueo de capitales, se está consiguiendo poco a poco mediante la trasposición de las Directivas europeas en esta materia. En todas las legislaciones se han ido produciendo reformas en aras de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

9. CONCLUSIONES

Prevenir actividades consistentes en el blanqueo de capitales realizadas por un cliente y la obligación de comunicar a las autoridades competentes de las sospechas sobre ello, junto con el deber de secreto profesional han sido el objeto de este trabajo, analizando la limitación que aquella supone para este.

El secreto profesional debe entenderse en una doble perspectiva: secreto profesional y manifestación del derecho de defensa. Ambos aspectos colisionan con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales cuando ésta obliga a los abogados a, entre otros, poner en conocimiento del SEPBLAC, cualquier actividad de su cliente que estime sospechosa en esta materia. Por lo tanto, no todo abogado disfruta en su actividad profesional del derecho a la confidencialidad.

Como se ha visto, el secreto profesional conforma los hechos que el cliente ha transmitido a su abogado. De modo que, si el letrado obtiene más información por distinto medio, esta no constituirá secreto. Por lo tanto, el deber de secreto tendrá cabida únicamente cuando el acceso a la información se alcance mediante el desempeño de las funciones propias de un abogado, es decir, aquellas que garantizan el derecho a la defensa y una tutela judicial efectiva: **defensa, representación y asesoramiento jurídico**. Solo estas tres actuaciones, a las que se refiere el artículo 22 de la Ley 10/2010, legitiman el privilegio de la confidencialidad. Con ello se puede apreciar la intención del legislador de evitar el abuso de la figura del abogado como instrumento para fines como el blanqueo de capitales.

Debido al carácter globalizador del blanqueo de capitales, nos encontramos ante grandes cantidades de dinero de origen ilícito, circulando en el flujo normal de nuestra economía, generando una gran inestabilidad en el mercado. El blanqueo de capitales está en constante evolución y, por tanto, los medios para prevenirlo también han de hacerlo. Es evidente que este delito ha dado lugar a una normativa muy amplia dirigida a luchar contra ese fenómeno y a la introducción en España, a través de la Ley 10/2010, de una serie de deberes para los sujetos obligados. No obstante, la falta de homogeneidad de la regulación del delito entre los diferentes países, a pesar del esfuerzo que se está haciendo para conseguirla, puede dar como resultado una falta de credibilidad en el sistema financiero.

Es cierto que, es necesario luchar contra el fenómeno del blanqueo, pero la ardua tarea que se ha encomendado a los profesionales de la abogacía es muy difícil de cumplir teniendo en cuenta la importancia que tiene el secreto profesional para preservar la intimidad, y sobre todo el derecho fundamental de defensa de los clientes.

Ciertamente, la Ley 10/2010 intenta proteger el deber de secreto profesional a través de su artículo 22 estableciendo la no sujeción de los abogados cuando desempeñen las funciones propias de la profesión. Sin embargo, esta protección puede resultar en ocasiones insuficiente. La imposición de estos deberes a los abogados les hace asumir riesgos como comunicar a las autoridades aquello que no debe comunicar y cometer un delito de revelación de secretos o no comunicar lo que

debe e incurrir en responsabilidad administrativa y/o multas cuantiosísimas. Al fin y al cabo, los términos de indicio o certeza que utiliza la Ley pueden tener una interpretación muy subjetiva.

En definitiva, no hay que olvidar que el secreto profesional no existe en beneficio de quien ejerce la Abogacía sino para proteger el derecho de defensa y la intimidad del cliente.

Como última conclusión se puede traer a colación una reflexión personal. El bien jurídico protegido en la tipificación de este delito es el orden socioeconómico, bien que no se considera derecho fundamental, aunque sí de interés general. Para dicha protección a través de las normas sobre prevención de blanqueo de capitales, se obliga a los abogados a vulnerar el secreto profesional y con ello el derecho fundamental a la intimidad del cliente, cuando menos. Pero igual de cierto es que la vida humana es el derecho fundamental básico, reconocido en el artículo 15 de nuestra Constitución, por cuanto constituye la esencia de la persona junto a la dignidad humana, y nadie ha impuesto a los abogados la obligación de investigar y comunicar cualquier sospecha sobre si su cliente tiene la intención de cometer un delito de asesinato.

10. BIBLIOGRAFIA

LIBROS ESPECIALIZADOS

- Sánchez Stewart, Nielson. *“Manual de deontología para abogados”*. 1ª Edición. Ed. La Ley, Madrid, 2012.
- Otero Gonzalez, Mª del Pilar. *“Justicia y secreto profesional”*. Ed. Centro de estudios Ramon Areces, S.A, Madrid, 2003.
- Córdoba Roda, Juan. *“Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales”*. Ed. Marcial Pons Ediciones jurídicas y sociales S.A, Madrid, 2006.
- Silva Sánchez, Jesús María. Ragués i Vallès, Ramón. *“Lecciones de Derecho Penal. Parte especial”*. 3ª Edición. Ed. Atelier Libros, Barcelona, 2011
- Martínez-Bujan Pérez, Carlos. *“Derecho Penal económico y de la empresa. Parte especial”* 5ª Edición. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

- Muñoz Conde, Francisco. "Derecho penal. Parte especial". Ed. Tiranch Lo Blanch. Valencia, 2017.

LEGISLACION

- España. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- España. Constitución Española
- España. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- España. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- España. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- España. Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.
- España. Código Deontológico de la Abogacía Española.
- Unión Europea. Directiva 2005/60/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (III Directiva).

JURISPRUDENCIA

- Unión europea. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de 6 de diciembre de 2012. Caso Michaud contra Francia (JUR/2012/382735).
- Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 14 de diciembre de 2010. Caso Akzo.
- España. Sentencia del Tribunal Supremo 451/2018, de 10 de octubre de 2018.
- España. Sentencia del Tribunal Supremo 496/2001, de 3 de marzo de 2003.
- España. Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de febrero de 1998.
- España. Sentencia del Tribunal Supremo núm.433/2008, de 3 de julio.

- España. Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de octubre de 2004 (RJ 2004/6557)
- España. Sentencia 200/2011, de la Audiencia Provincial de Málaga, de 31 de marzo.
- España. Tribunal Supremo. Sentencia 975/2012, de 5 de diciembre.
- Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015, de 29 de abril.

WEBS Y OTROS

- www.legaltoday.com
- www.noticiasjuridicas.com
- Revista Aranzadi Doctrinal, nº8 (septiembre 2017). “El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional”. Daniel Fernández Bermejo.
- www.iberley.es